Crónica
Legislativa,
Doctrina
Judicial y
Noticias
Bibliográficas

MARÍA NIEVES MORENO VIDA

CATEDRÁTICA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MIEMBRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA

LABORUM

1. CRÓNICA LEGISLATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS MATERIAS CONEXAS

1.1. UNIÓN EUROPEA

-Datos mensuales de desempleo.-Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2241 de la Comisión de 16 de diciembre de 2019 por el que se describen las variables, así como la duración, los requisitos de calidad y el nivel de detalle de las series temporales, para la transmisión de los datos mensuales de desempleo de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE 30-12-2019, L 336/2015)

-Datos para renta.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2242 de la Comisión de 16 de diciembre de 2019 por el que se especifican los datos técnicos de los conjuntos de datos, se establecen los formatos técnicos y se detallan las modalidades y el contenido de los informes de calidad en relación con la organización de una encuesta por muestreo en el ámbito de la renta y las condiciones de vida, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE 30-12-2019, L 336/133)

-Fondo Social Europeo.- Reglamento Delegado (UE) 2019/2170 de la Comisión de 27 de septiembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión (DOUE 19-12-2019, L 392/2)

1.2. EXTRANJERÍA

-Contrataciones en origen.- Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020 (BOE 31-12-2019)

Conforme a lo previsto en el art. 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el Reglamento de la misma, aprobado por RD 557/2011, de 20 de abril, esta Orden prevé la gestión colectiva de contrataciones en origen en un periodo determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos trabajadores extranjeros que no se hallen o residan en España y que inicialmente fueran seleccionados en sus países.

Igualmente habilita para establecer un número de visados de búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones.

Tras las consultas realizadas a las comunidades autónomas y una vez recibida la información del Servicio Público de Empleo Estatal sobre la situación nacional de empleo, se considera conveniente no aprobar contrataciones de puestos de trabajo de carácter estable en la presente orden.

Sin embargo, en atención a la información recibida en las citadas consultas, sí se estima procedente aprobar la presente orden que prevé la concesión de visados para búsqueda de empleo, dirigidos a hijos y nietos de español de origen y que regula las particularidades del procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio para 2020, para los diferentes sectores y preferentemente en relación con los países con los que España hubiese firmado un acuerdo de regulación de flujos migratorios.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

1.3. SEGURIDAD SOCIAL

-Acuerdo de convalidación.- Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social (BOE 4-12-2019)

-Medidas en materia de Seguridad Social.- Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social (BOE 28-12-2019)

Las principales novedades que se incorporan en materia de Seguridad Social son las siguientes:

1-Se establecen nuevas medidas en materia de revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, a las bases y topes de cotización, a la cotización de determinados colectivos y otras medidas conexas en el art. 7. Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en vigor la LPGE del Estado para dicho año u otra norma con rango legal que regule esta materia, la revalorización de las pensiones de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la determinación de otras cuantías de prestaciones públicas estatales, así como las bases mínimas y máximas de cotización y los tipos de cotización a la Seguridad Social, se regirán por las siguientes disposiciones:

-Las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado, las causadas al amparo de la legislación especial de guerra y otras prestaciones públicas estatales mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31-12-2019, manteniéndose asimismo las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los límites de ingresos aplicables que figuran en el anexo I del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, y en los arts. 2 y 3 del RD-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

-Se suspende la aplicación de lo establecido en el art. 58 de LGSS, art. 27 del texto refundido de la Ley Clases Pasivas del Estado, y el art. 35 y disposición adicional 50^a

LPGE para el año 2018.

- Una vez aprobada la norma correspondiente, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas producirá efectos desde el 1-1-2020.

- Las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el sistema de Seguridad Social serán las establecidas en el art. 3 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
- La cotización en el Sistema Especial de Empleados de Hogar se regirá por lo dispuesto en el art. 4 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
- La cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios se regirá por lo dispuesto en el art. 5 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
- Las bases mínimas de cotización de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del RETA y de los trabajadores autónomos incluidos en el grupo 1º de cotización al que se refiere el art. 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, mantendrán las cuantías que hayan resultado de aplicar lo establecido en el apartado 1 del art.6 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
- Las restantes bases de cotización se determinarán según las reglas establecidas en los apartados 2 a 8 del art. 6 del RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
- Los tipos de cotización aplicables a los trabajadores por cuenta propia o autónomos del RETA y a los trabajadores autónomos incluidos en el grupo 1º de cotización al que se refiere el art. 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, serán los mismos tipos de cotización establecidos en los arts.7 y 8 del RD-ley 28/2018 con las previsiones contempladas en la disposición transitoria 2ª segunda del mismo texto legal.
- Las bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el RETA, seguirán siendo las establecidas en el art.9 del RD-ley 28/2018.
- Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el RD 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2020.
- Seguirá siendo de aplicación a la cotización en el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, dentro del RGSS, lo dispuesto en la disposición adicional 4ª del RD-ley 28/2018.
- Las cuantías de los haberes reguladores para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra, serán las establecidas en el apartado III del Anexo I del RD- ley 28/2018.

2-Se dispone la prórroga de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019 (Disposición adicional segunda)

3-Se amplía el plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social (Disposición adicional tercera)

4-Se prevén nuevas reglas relativas al pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro (Disposición adicional cuarta)

5-Se prorroga el plazo de vigencia del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 (disposición adicional quinta).

6-Se modifica la Disp. Transi. 4ª. apartado 5º del TRLGSS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. (Disposición final primera)

-Prestaciones complementarias.- Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 13-12-2019)

La presente Resolución elabora el catálogo de prestaciones complementarias autorizadas al amparo del artículo 96.1.b) del TRLGSS, que podrán ser implementadas por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social atendiendo a su disponibilidad presupuestaria. No podrán otorgarse prestaciones distintas a las contempladas en este Catálogo.

La presente resolución entró en vigor el 1 de enero de 2020, si bien prevé que los expedientes iniciados y no resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de esta resolución se adapten a las previsiones contempladas en la propia Resolución.

-Prestaciones complementarias. MUFACE.- Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina (BOE 30-12-2019)

Esta Resolución modifica el anexo I de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, con el objeto de adaptar el Catálogo General de Material Ortoprotésico de MUFACE para los grupos de prótesis externas (prótesis distintas a las prótesis de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos), sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales, al Catálogo Común de Prestación Ortoprotésica Suplementaria del Sistema Nacional de Salud, y regular determinados aspectos de la prestación cuyo desarrollo corresponde a la administración sanitaria competente, de conformidad con lo dispuesto en el anexo VI del RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, modificado por la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, y la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril. El anexo I de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, actualizado con las referidas modificaciones, figura como anexo a la presente Resolución.

Además, se modifica el epígrafe 2 de los anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, en la redacción dada por la Resolución de 19 de febrero de 2019 de esta Mutualidad, sustituyendo el mes de septiembre por el mes de mayo a efectos del procedimiento de solicitud en formato papel de las prestaciones dentarias y oculares.

Igualmente se establece que a partir de 1-7-2020 se financiarán los audífonos incluidos en el anexo I hasta la edad de 22 años. Cada año, a partir de dicha fecha se incorporará un nuevo tramo de dos años de edad, hasta alcanzar los 26 años.

-Contabilidad Presupuestaria.- Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (BOE 4-01-2019)

-Pensiones.- Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social (BOE 15-1-2020)

Con efectos de 1 de enero de 2020, este RD-ley establece una revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, del 0,9 por ciento, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 LGSS y en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Como complemento a esta previsión, el RD-ley incorpora un anexo en el que se recogen las cuantías de las pensiones mínimas, de otras pensiones y prestaciones públicas, así como los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y las cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra para el año 2020.

Este real decreto-ley se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

-El artículo primero versa sobre la determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, estableciendo con carácter general un incremento del 0,9 por ciento cuyos efectos se retrotraen al 1 de enero de 2020. Igualmente se especifican aquellas otras pensiones públicas que no se ven afectadas por este incremento.

-El artículo segundo consagra una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo durante el año 2020 en caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 sea superior al 0,9 por ciento.

-La disposición adicional única establece que la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del presente RD-ley, no siendo de

aplicación lo dispuesto en los artículos 58 LGSS y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

-La disposición transitoria retrotrae los efectos económicos de las disposiciones previstas en este real decreto-ley a 1 de enero de 2020.

-El anexo establece las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2020.

-Mutuas.- Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. (BOE 21-01-2020)

Por Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE n.º 197, de 17 de agosto de 2019), se dictaron instrucciones en relación con la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

En el modelo 7 del anexo de la resolución anterior se ha detectado la existencia de un error, pues en el mismo se omitieron las columnas destinadas a recoger la información relativa a la distribución por regímenes de la Seguridad Social del suplemento financiero definitivo autorizado.

En consecuencia, esta Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resuelve modificar el modelo 7 del anexo de la Resolución de 2 de agosto de 2019, de esta Dirección General, el cual se sustituye por el que se incorpora como anexo de esta resolución.

1.4. DISCAPACIDAD

-Protección civil.- Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias (BOE 3-1-2020)

-Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias (BOE 3-1-2020)

1.5. RELACIONES DE TRABAJO

-Salario mínimo interprofesional. Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 (BOE 5-2-2020)

Las nuevas cuantías representan un incremento del 5,555555556 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2020 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.

Asimismo, tienen en cuenta lo recogido en el Acuerdo Social para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en 2020 suscrito el 30 de enero de 2020 por el Gobierno y los interlocutores sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, el real decreto incorpora, como en años anteriores, reglas de afectación en una disposición transitoria con el objetivo de evitar que el incremento del salario mínimo interprofesional provoque distorsiones económicas o efectos no queridos en los ámbitos no laborales que utilizan el SMI a sus propios efectos.

El citado incremento tiene por objeto hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores. Elevar el salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales nos acerca a dicha interpretación.

OTRAS NORMAS

-Contratación del sector público.- Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020 (BOE 31-12-2020)

-Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE 22-1-2020)

A través de este Real Decreto se procede al incremento de las retribuciones en el ámbito del sector público.

En concreto, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, establecía un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los

años 2018 y 2020. En el mismo se preveía para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Al mantenerse la prórroga presupuestaria de los Presupuestos de 2018 se posibilita, a través del RDL 2/2020 el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado Acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2020.

-Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (BOE 5-2-2020)

-Libro primero. Transposición de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

-Libro segundo. Medidas para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de seguros privados y planes y fondos de pensiones.

-Título I. Transposición de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros.

-Título II. Transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

Artículo 212. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

-Título III. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Artículo 213. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

-Libro tercero. Medidas para la adaptación del derecho español a determinada normativa europea en materia fiscal.

El plazo de transposición de estas Directivas expiró el 18 de abril de 2016, sin que la transposición de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se hubiera completado, a pesar de que determinadas materias reguladas en las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE se habían

transpuesto ya a través de determinadas modificaciones puntuales del entonces vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de 2011 aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y, posteriormente, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El 7 de diciembre de 2017 la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que declare que España ha incumplido las obligaciones que le incumben, siendo de esperar que sendas sentencias previsiblemente condenatorias sean dictadas en próximas fechas. El proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, no pudo ser aprobado por la disolución de las Cámaras parlamentarias en marzo de 2019, imposibilitando el cumplimiento de la obligación que incumbe al Reino de España de aprobar las disposiciones necesarias para completar la transposición de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la completa incorporación al ordenamiento jurídico español de las citadas Directivas, y en cumplimiento de la Decisión del Consejo de 2016, resulta imprescindible acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición urgente, lo que previsiblemente determinará que los recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decaigan por pérdida de su objeto y, en cualquier caso, debería evitar la imposición de sanciones económicas a España, al haber solicitado la Comisión Europea la imposición de multas coercitivas diarias.

En este ámbito, con este real decreto-ley se completa la transposición del paquete de Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea en 2014, esto es, además de las ya citadas Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Estas tres Directivas son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitirá incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas, PYMES, en la contratación pública, así como favorecer que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales, laborales y medioambientales comunes. Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica, así como incorporar la Jurisprudencia

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.

Por otro lado, en estos momentos se da un significativo retraso en la transposición de las siguientes normas, la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros; la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, y la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. En relación a esta última se ha considerado conveniente su transposición parcial mediante este real decreto-ley en las materias que afectan directamente al sector asegurador.

Todas ellas son normas con un elevado componente de protección de los derechos de los clientes de servicios financieros tanto en su vertiente de tomador, asegurado, beneficiario, y participe de planes y fondos de pensiones, en lo que respecta a la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, y la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, como desde la perspectiva de inversor, con las mejoras del sistema de información que proporciona la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017.

Por otro lado, este real decreto-ley contiene modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, con la finalidad de proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno.

2. CRÓNICA DE DOCTRINA JUDICIAL

- I. Configuración jurídica general del Sistema de Seguridad Social (Sistema de Fuentes y Estructura Básica del Sistema Normativo)
- II. Ámbito Subjetivo de aplicación de la Seguridad Social
- III. Gestión de la Seguridad Social
- IV. Actos de encuadramiento o de inmatriculación (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores)
- V. Financiación de la Seguridad Social. La cotización
- VI. Acción Protectora. Régimen jurídico del derecho a prestaciones
- VII. Acción protectora. Las prestaciones del Sistema de Seguridad Social:
 - A) Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente
 - B) Maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia y paternidad
 - C) Jubilación
 - D) Prestaciones para situaciones derivadas de muerte y supervivencia (Viudedad, orfandad y a favor de otros familiares)

- E) Prestaciones familiares
- F) Desempleo
- G) Prestaciones Sanitarias
- VIII. Asistencia Social y Servicios Sociales
- IX. El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia
- X. Protección Social Complementaria (Iniciativa Privada)
 - A) Mejoras Voluntarias
 - B) Fundaciones Laborales y Entidades de Previsión Social
 - C) Planes y Fondos de Pensiones privados y Seguros Colectivos
- XI. Aspectos procesales de Seguridad Social

V. Financiación de la Seguridad Social. La cotización

-STS 773/2019 13/11/2019 Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Pluriactividad. Cómputo de cotizaciones para incrementar la cuantía de la base reguladora. Interpretación del artículo 49 LGSS (anteriormente D.A. 38^a). La acumulación de bases sólo procede cuando no se cause o pueda causarse pensión en un régimen, pero no cuando tal circunstancia constituya una posibilidad futura al seguir el sujeto en alta y cotizando en el régimen cuyas cotizaciones pretende acumular.

VI. Acción Protectora. Régimen jurídico del derecho a prestaciones

-STS 771/2019. 12/11/2019 Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Indemnización por accidente de Trabajo. Responsabilidad de la aseguradora cuando se comunica el accidente con posterioridad al plazo previsto en la póliza. No procede. Distinción entre cláusulas limitativas y lesivas. Reitera doctrina

-STS 777/2019. 13/11/2019 Ponente: José Manuel García de la Serrana

Enfermedad profesional. Epicondilitis. Lo es en gerocultora de una Residencia de Ancianos que con frecuencia se ve obligada a mover, cambiar y acostar a las personas que cuida movimientos de cuerpos pesados que sobrecargan sus músculos y tendones.

-STS 796/2019 21/11/2019 Ponente: Antonio Vicente Sempere Navarro

Interrupción del plazo prescriptorio para reclamar daños y perjuicios derivados de accidente laboral (art. 59 ET): inocuidad del procedimiento sobre recargo de prestaciones seguido a instancia de la empresa sancionada. Sigue doctrina de STS 4 julio 2006 (rec. 834/2005) y la concuerda con la de STS 14 julio 2015 (rec. 407/2104), conforme a la cual el plazo de prescripción para imponer el recargo de prestaciones se interrumpe cuando es el

trabajador quien acciona reclamando daños y perjuicios. En concordancia con Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ Navarra 85/2017 de 28 febrero

-STS 847/2019 05/12/2019 Ponente: María Lourdes Arastey Sahún

Indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. Intereses moratorios de la aseguradora de la empleadora condenada. Art. 20.8 LC. No hay justificación para que no se aplique la mora desde la fecha del siniestro.

VII. Acción Protectora. Las prestaciones del Sistema de Seguridad Social:

A). Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente

-STS 753/2019 06/11/2019 Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Incapacidad Temporal. Derecho a la prestación económica por IT derivada de misma o similar patología transcurrir más de 180 días. Necesidad de que la decisión denegatoria del INSS sea objetiva y razonada. Reitera doctrina.

-STS 827/2019 04/12/2019 Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga

Trabajadora a la que se le ha reconocido IPA por sus lesiones oculares y solicita ser declarada en GI por agravación de dichas lesiones, que son posteriores a la afiliación a la Seguridad Social.

C). Jubilación

-STEDH 12-12-2019 Caso Romeva c.Macedonia

Propiedad privada Artículo 1 del Protocolo No. 1). Violación del derecho. Satisfacción justa: 6,000 euros (EUR) por daños materiales e inmateriales.

El caso trata sobre una decisión de privar de una pensión de jubilación a la demandante. En 2000, el Fondo de Pensiones y Discapacidad otorgó a la Sra. Romeva una pensión de jubilación. La decisión devino definitiva y comenzó a recibir pagos mensuales.

Sin embargo, tras una auditoría interna en 2007, el Fondo descubrió que la Sra. Romeva no había trabajado desde 1963 hasta 1967, lo que significa que no había trabajado el mínimo legal de 35 años para lucrar una pensión. Para corregir ese error, el Fondo abrió de oficio una revisión de su caso dictaminó en 2007 que despojarla retroactivamente de la pensión. Todas sus apelaciones fueron infructuosas.

La Corte Suprema sostuvo en 2010 que la decisión del Fondo había sido legal. El Fondo interpuso un proceso civil contra la Sra. Romeva por el reembolso de los pagos de la pensión que le pagaron entre 2000 y 2007. Los tribunales fallaron a favor del Fondo en una sentencia final de 2014 y se iniciaron los procedimientos de ejecución. Mientras el proceso de pensiones aún estaba pendiente de finalización, la Sra. Romeva volvió a tener derecho a una pensión a partir de noviembre de 2009 a raíz de cambios en la legislación nacional.

Basándose en particular en el artículo 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la propiedad), la Sra. Romeva se quejó que había sido privada de su pensión, que había sido su única fuente de ingresos. Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1. Satisfacción justa: 6,000 euros (EUR) por daños materiales e inmateriales.

-STJUE 12-12-2019, asunto C-450/18, WA e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

«Procedimiento prejudicial – Política social – Directiva 79/7/CEE – Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social – Artículo 4, apartados 1 y 2 – Artículo 7, apartado 1 – Cálculo de las prestaciones – Directiva 2006/54/CE – Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación – Norma nacional que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por incapacidad permanente – No reconocimiento de este derecho a los hombres que se encuentren en una situación idéntica – Situación comparable – Discriminación directa por razón de sexo – Excepciones – Inexistencia»

En el asunto C-450/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, mediante auto de 21 de junio de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2018, en el procedimiento entre WA e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.

-STJUE 5-12-2019, Asuntos acumulados C-398/18 y C-428/18, Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18). e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

«Procedimiento prejudicial – Seguridad social de los trabajadores migrantes – Reglamento (CE) n.º 883/2004 – Pensión de jubilación anticipada – Acceso – Importe de la pensión a percibir que debe superar el importe mínimo legal – Toma en consideración únicamente de la pensión adquirida en el Estado miembro de que se trate – Falta de toma en consideración de la pensión de jubilación adquirida en otro Estado miembro – Diferencia de trato para los trabajadores que han ejercido su derecho a la libre circulación»

En los asuntos acumulados C-398/18 y C-428/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 del TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante autos de 25 de mayo y 13 de junio de 2018, recibidos en el Tribunal de Justicia los días 15 y 28 de junio de 2018, respectivamente,

en los procedimientos entre Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18). e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,

El Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

El artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que impone, como requisito para que un trabajador acceda a una pensión de jubilación anticipada, que el importe de la pensión a percibir sea superior al importe de la pensión mínima que ese trabajador tendría derecho a percibir al cumplir la edad legal de jubilación en virtud de dicha normativa, entendiéndose el concepto de «pensión a percibir» como la pensión a cargo únicamente de ese Estado miembro, con exclusión de la pensión que el citado trabajador podría percibir en concepto de prestaciones equivalentes a cargo de otro u otros Estados miembros.

-STS 731/2019. 23/190/2019, Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Pensión de jubilación conforme a Reglamentos comunitarios. El subsidio por desempleo no computa a efectos de determinación de la carencia de 15 últimos años en que deben encontrarse 2 de carencia específica. Doctrina del paréntesis

-STS 775/2019. 13/11/2019, Ponente: Sebastián Moralo Gallego

Jubilación anticipada del art. 207 LGSS. El cese en el trabajo no es por una causa no imputable a la voluntad del trabajador derivada de reestructuración empresarial. No se acredita haber percibido la indemnización legal por despido objetivo individual. Las rentas mensuales que viene percibiendo a través de una póliza de seguro de vida no tienen esa naturaleza jurídica. La extinción de la relación laboral se produjo de mutuo acuerdo.

-STS 797/2019. 21/11/2019, Ponente: Sebastián Moralo Gallego

Complemento a mínimos. Para establecer la cuantía de los ingresos económicos del pensionista que dan derecho a su percepción, debe computarse como rendimiento del capital inmobiliario la imputación de renta a efectos del IRPF del 2% del valor catastral de los bienes inmuebles no generadores de rendimiento del capital.

F). Desempleo

-STS 760/2019. 12/11/2019, Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga

Prestación de desempleo a favor de un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su padre en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con el mismo. Se reconoce la prestación. DA 10ª Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

G). Prestaciones Sanitarias

-STS 795/2019. 20/11/2019, Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Reintegro de gasto sanitario reclamado por la Mutua colaboradora al servicio autonómico de salud por considerar que corresponde la contingencia asegurada por el INSS. El importe de la misma debe ser reintegrado por el Servicio de Salud. Rectifica doctrina

-STS 794/2019. 20/11/2019, Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer

Asistencia sanitaria prestada por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales cuyo reintegro se reclamó al Servicio Andaluz de Salud. Afectación general. Rectifica doctrina. Pleno

X. Protección Social Complementaria (Iniciativa Privada)

-STJUE 19-12-2019, Asunto C-168/18 Pensions-Sicherungs-Verein VVaG y Günther Bauer,

«Procedimiento prejudicial – Política social – Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario – Directiva 2008/94/CE – Artículo 8 – Regímenes complementarios de previsión – Protección de los derechos a prestaciones de vejez – Nivel mínimo de protección garantizado – Obligación a cargo del antiguo empresario de compensar una reducción de la pensión de jubilación de empresa – Entidad externa de previsión – Efecto directo»

En el asunto C-168/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania), mediante resolución de 20 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2018, en el procedimiento entre Pensions-Sicherungs-Verein VVaG y Günther Bauer, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1) El artículo 8 de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a la situación en la que el empresario que satisface las prestaciones de jubilación de empresa a través de una entidad interprofesional no puede asumir, a causa de su insolvencia, la compensación de las pérdidas resultantes de una reducción del importe de dichas prestaciones gestionadas por esa entidad interprofesional cuando tal reducción ha sido autorizada por la autoridad pública de supervisión de los servicios financieros que ejerce el control de la referida entidad.

2) El artículo 8 de la Directiva 2008/94 debe interpretarse en el sentido de que la reducción del importe de las prestaciones de jubilación de empresa abonadas a un antiguo trabajador asalariado debido a la insolvencia del empresario se considera manifiestamente desproporcionada, aunque el interesado perciba cuando menos la mitad del importe de las prestaciones resultantes de sus derechos adquiridos, si este antiguo trabajador asalariado ya vive o habría de vivir, a causa de dicha reducción, por debajo del umbral del riesgo de pobreza fijado por Eurostat para el Estado miembro de que se trate.

3) El artículo 8 de la Directiva 2008/94, que establece una obligación de protección mínima, puede tener efecto directo, de suerte que puede ser invocado frente a una entidad de Derecho privado designada por el Estado como institución de garantía contra el riesgo de insolvencia de los empresarios en materia de pensiones de jubilación de empresa cuando, teniendo en cuenta las funciones que se le han atribuido y el régimen al que está sometido su cumplimiento, esa entidad puede ser asimilada al Estado, siempre que la función de garantía atribuida se extienda efectivamente a los tipos de prestaciones de vejez para los que se solicita la protección mínima establecida en el citado artículo 8.

XI. Aspectos procesales de Seguridad Social

-STS 765/2019. 12/11/2019, Ponente: Antonio Vicente Sempere Navarro

Acceso al recurso de suplicación por impugnación de sanciones en materia de Seguridad Social. Viene determinado por la cuantía general de 3000 €. Doctrina válida para sanciones impuestas al empleador. Reitera doctrina.

-STS 776/2019. 13/11/2019, Ponente: Concepción Rosario Ureste García

Falta de cuantía para acceder al recurso de suplicación. Diferencia de 98 días en la prestación de desempleo reconocido que la EG funda en la extemporaneidad de la petición. Aplica doctrina y confirma la STSJ.

3. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

I. Obras generales de Seguridad Social y materias conexas

- ALONSO OLEA, M./MONTROYA MELGAR, A./SEMPERE NAVARRO, A.V./SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: *Jurisprudencia Constitucional sobre trabajo y seguridad social*, tomo XXXVI (2015-2018), Civitas, 2019, págs. 1840
- ALONSO SECO, J.M.: *La política social como realización de derechos sociales*, Ed. Tirant Humanidades, 2019, 750 págs.
- BENAVIDES VICO, A.: *Guía del experto en seguridad social*, Ed. Aranzadi, 2019, pág.1170 (2 volúmenes)
- CARDENAL CARRO (Dir): *Derecho del trabajo y protección social en la Unión Europea. Situación actual y perspectivas de futuro*, Dykinson, 1ª ed., 2020, págs. 241
- CASTELLI, N.: *Las migraciones internacionales. Una mirada crítica a la regulación internacional y europea desde la perspectiva laboral*, Bomarzo, 2019, págs.114
- IGLESIAS FERNÁNDEZ, J.: *Pensiones públicas ayer hoy y siempre*, Ed. Zambra-Baladre, 2020, págs. 208
- LÓPEZ ARRANZ, M.A.- *Violencias de género en el nuevo mercado tecnológico de trabajo*. Ed. Aranzadi, 2019, 112 págs.
- MARTÍNEZ BARROSO, R. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: *Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y las acciones de responsabilidad social*, Ed. Juruá, 2019, págs. 315.

- MARTÍNEZ LÓPEZ J.A. (Coord.): *Protección social a las personas en situación de dependencia en España*, Ed. Pirámide, 2020, págs. 188.
- PERULLI, A./VALDÉS DAL- RÉ, F.: *Lecturas de derecho laboral español e italiano. Letture di diritto del lavoro spagnolo e italiano*, Tirant lo Blanch, 2020, págs. 1051.
- VVAA: *Ley general de la seguridad social comentada*, Ed. Francis Lefebvre, 2019, 575 págs.

4. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

Recensión al libro "La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales". José Luis Monereo Pérez, Murcia, Laborum, 2020, 261 páginas

BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA

Profesora Contratada Doctora (acreditada como Titular de Universidad) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada

La dignidad de la persona se inserta en el discurso que ha presidido el proceso histórico de emancipación del hombre y, en este contexto, ha sido una de las categorías universales y omnicomprensivas que comprenden, por excelencia, las exigencias de la triada de libertad, igualdad y solidaridad o fraternidad entre los hombres. Sin embargo, el artículo 10.1 de la Constitución Española se muestra excesivamente escueto para alcanzar una garantía plena de la dignidad humana en todos los ámbitos donde se desarrolla la personalidad del individuo. Es por ello que resulta preciso atribuir a la «dignidad humana» el valor que ostenta de eje, dentro del sistema multinivel, para la garantía de los derechos fundamentales que se reconocen a nivel comunitario e internacional. Para ello se pretende residenciar la atribución de los derechos en la persona, reafirmando la intrínseca unidad, interdependencia y comunicabilidad de todos los derechos fundamentales sobre la base, precisamente, de ese valor de la «dignidad de la persona» en todos los ámbitos donde se desarrolla su personalidad.

El trabajador, en cuanto persona que es, disfruta también de este derecho el cual no puede verse limitado en el ámbito de las relaciones laborales y de Seguridad Social. Sin embargo, al hilo de las nuevas tecnologías de la producción y las relaciones de trabajo por cuenta ajena este derecho fundamental está quedando cuestionado. Y ello es porque, justo en este ámbito, el trabajador es tratado muchas veces más como «objeto» que como un «sujeto» de derechos y capacidades humanas.

En materia de Seguridad Social la cuestión resulta igualmente conflictiva, ya que el marco constitucional regulador que se crea resulta insuficiente y deficiente. De ahí que el Tribunal Constitucional haya interpretado restrictivamente este derecho, lo que contribuye decisivamente a ese déficit en la garantía constitucional de los derechos de seguridad social. Por todo ello, este derecho no queda mínimamente blindado ante políticas restrictivas de Seguridad Social, algo que resulta incomprensible y desproporcionado. Frente a este criterio hermenéutico, se debe entender que la seguridad social es derecho social fundamental (en el sentido amplio atribuido a este último término en el derecho internacional de los derechos fundamentales) que de manera sistemática se relaciona con el grupo o bloque normativo constitucional regulador del derecho a la dignidad, a saber: artículos 41, 43, 49, 50 en

relación con el artículo 10.2 Constitución española, que es la norma de apertura constitucional de engarce y remisión al sistema multinivel de garantía del derecho a la seguridad social, y los artículos 93 a 96 Norma Fundamental. Sorprende, a este respecto, la falta de concienciación, flexibilidad y adaptación a la realidad de la normativa de Seguridad Social para respetar el derecho a la dignidad de todos los trabajadores.

El novedoso libro “*La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales*”, publicado en 2020 por la editorial Laborum, se conforma así como un magnífico referente a tener en cuenta para una comprensión sustancial de la materia, ya sea de un modo un tanto general, como de otra mucho más específica y dirigida en base, claro está, a las necesidades del jurista. La obra tiene por autor al profesor y catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, José Luis Monereo Pérez, conocido no sólo por su excelente labor docente, sino también por su reconocida faceta investigadora, de ahí la fructífera y cuantiosa producción ensayística y monográfica que ha visto la luz bajo la firma de su autoría en numerosas editoriales y revistas jurisprudenciales de reconocido prestigio.

Se trata de una obra muy completa y que analiza un tema de candente actualidad. Como pieza clave o piedra angular de la estructura de este manuscrito, se observa como a lo largo del mismo, su autor no cesa en analizar escrupulosamente los principales óbices de que dificultan la consecución de un derecho al trabajo decente desde la misma configuración de los derechos fundamentales, pero sin olvidar su lugar en referencia a los textos normativos a nivel nacional, autonómico y comunitario, lo que brinda al lector de un conocimiento completo sobre la materia.

La monografía se sistematiza en dos grandes partes, pero antes de adentrarnos en la correspondiente temática, el lector se encontrará con una pequeña introducción a cargo del autor en donde se analizan de manera elemental las intenciones que han posibilitado la elaboración de este volumen. La estructura general que sigue el libro es la siguiente: "I. La dignidad de la persona: significación fundante y su fuerza normativa en el sistema multinivel de garantías de los derechos y capacidades humanas. La dignidad de la persona como fundamento de los principios de la libertad, igualdad y solidaridad. I.1. El Derecho Internacional General (El Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y la dignidad de la persona. I.2. El Derecho Europeo y la dignidad de la persona. I.3. Derecho Español. La garantía constitucional de la dignidad humana. II. La dignidad de la persona que trabaja como expresión “materializada” del principio de dignidad humana: la indivisibilidad de los derechos laborales genéricos o inespecíficos de los derechos específicos sociales. II.1. La dignidad de la persona y el Derecho Social. Un enfoque de conjunto. II.2. Dignidad humana y trabajo decente: la función garantista de la OIT. II.3. Derecho fundamental a la dignidad en el trabajo en la carta social europea revisada en 1996 (artículo 26)".

En definitiva, nos hallamos ante un sugestivo volumen que cubre perfectamente y de manera pormenorizada: “*La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales*”. Se conforma así un manual excepcional de necesaria consulta, para todo aquél que desee adentrarse y enriquecerse con este complejo mundo *iustlaboral*. Y es que en este tratado no sólo se analizan con soltura y rigor cada uno de los elementos jurídicos que la actual y cambiante regulación establece, aún más, lo hace como eje vertebrador para la garantía de todos los derechos fundamentales de la persona. Finalmente, he de resaltar el

amplio, cuidado y detallado material monográfico, documental y científico seleccionado por el profesor José Luis Monereo Pérez para la elaboración de las dos partes que componen esta edición, así como el riguroso y concienciado orden que sigue en su redacción. Todo ello ofrece al estudioso una rica fuente de conocimientos laborales perfectamente estratificada y sistemática de todos y cada uno de los elementos que han hecho y hacen de ésta una temática de arduo encaje en el modelo legal vigente.

Recensión del Libro “Envejecimiento activo y vida laboral”, de VV.AA. (Monereo Pérez, J.L. y Maldonado Molina, J.A., Dirs.) Colección Trabajo y Seguridad Social. Dirigida por: José Luis Monereo Pérez. Editorial Comares, Granada, 2019, páginas: 619.

ALEJANDRO MUROS POLO

Becario “Iniciación a la Investigación”. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada.

El envejecimiento de la población, y más aún en el Mundo Occidental, es un serio y real problema al que la sociedad tiene que buscar una solución. El incremento de la esperanza de vida, así como el descenso de la natalidad han provocado que hoy en día se hable de una *población envejecida*, la cual necesita de los precisos estímulos para aprovechar esta situación y evitar o paliar las posibles consecuencias negativas, las cuales podrían ser: insostenibilidad de las pensiones públicas de jubilación, empobrecimiento de las personas mayores, aumento creciente de su estigmatización...

De este modo, la Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento activo como un proceso de optimización de oportunidades, estructuradas en cuatro pilares básicos: salud, participación, seguridad y aprendizaje continuo. El fin último sería el de integrar socio-laboralmente a aquellas personas mayores para que puedan contribuir al progreso y sostenimiento de la sociedad, así como favoreciendo un aumento de los estándares de calidad de vida. Pero no se debe olvidar que, ello no será posible si no se protegen y refuerzan los derechos de este colectivo débil, especialmente en materia de medidas de protección social.

La editorial Comares publica en 2019, en su número 123, esta interesantísima obra titulada: “*Envejecimiento activo y vida laboral*”, la cual aborda un complejo y técnico estudio de la integración de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en lo laboral. Cuestión que es de urgente necesidad ya que, tal y como se recoge en el libro, y a modo de que sirva de ejemplo para el resto de países desarrollados, para 2050 un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Esta novedad bibliográfica se encuadra dentro del Proyecto de Investigación “*Envejecimiento Activo y Vida Laboral: trabajadores maduros y pensionistas productivos*”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Sostenibilidad, convocatoria 2017, DER2017-85096-R, Universidad de Granada. Se trata de una monografía colectiva de extrema calidad científica e impacto, pues aporta una visión multidisciplinar e internacional de la problemática en cuestión, contando con casi una treintena de autores. De este modo, se configura una obra inédita y de enorme actualidad, merecedora de las bibliotecas más notorias, en la que intervienen profesores y expertos de enorme envergadura de las áreas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del ámbito de la Psicología Evolutiva y de la Educación y Psicobiología, así como científicos provenientes de instituciones de investigación italianas,

inglesas, brasileñas y americanas. Con este enfoque se logra dar una visión integrada y holística del envejecimiento activo, y especialmente, desde el prisma laboral, perfeccionando la prestigiosa Colección Trabajo y Seguridad Social, dirigida e impulsada por el Catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, José Luis Monereo Pérez.

Por otro lado, la estructura de este interesante manuscrito se articula en cinco partes, las cuales se recogen sintéticamente a continuación:

-Parte I. “El envejecimiento activo como presupuesto a la participación de los mayores en el mercado laboral”, dividida en doce capítulos: I. “Envejecimiento activo: su significado y fundamento actual. Teorías y estereotipos sobre el envejecimiento”; II. “El envejecimiento activo en los países de la Unión Europea”; III. “Planes para el retiro y envejecimiento activo: perspectiva en tres países”; IV. “Promoción del envejecimiento activo: adaptación y preparación a la jubilación”; V. “La participación social después de la jubilación”; VI. “Empoderamiento y la representación social y política de los mayores”; VII. “Retrasar el envejecimiento del cerebro después de la jubilación”; VIII. “Psicobiología del envejecimiento: cambios neurológicos, sensoriales, perceptivos, cognitivos y motores”; IX. “El envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como herramienta para adaptación de las personas mayores a las nuevas realidades”; X. “Acceso a la vivienda única. Medios y herramientas para su financiación”; XI. “Preparación para el envejecimiento activo en Andalucía. Marco institucional”; XII. “Vulnerabilidad, capacidad de decisión y calidad de vida de los adultos mayores en residencias”. En esta Parte se aborda, *grosso modo*, un estudio científico pormenorizado de lo que se entiende por envejecimiento, sus causas, consecuencias, percepción negativa y discriminación, así como delimitación de envejecimiento activo como solución, todo ello como premisa básica para configurar y abordar las sucesivas partes.

-Parte II. “Régimen laboral de los trabajadores de edad avanzada”, dividida en ocho capítulos: I. “La garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores maduros”; II. “Condiciones laborales de los trabajadores maduros: tiempo de trabajo y salud laboral”; III. “Condiciones laborales de los trabajadores maduros: retribución”; IV. “Reacomplamiento profesional y movilidad funcional de los trabajadores de edad avanzada como alternativa al cese de actividad”; V. “El principio de igualdad en el despido “objetivo” por ineptitud, enfermedad o discapacidad y los trabajadores maduros”; VI. “El despido colectivo de los trabajadores de edad avanzada”; VII. “Líneas de actuación relacionadas con las condiciones de trabajo de los mayores de 55 años, con particular atención a la seguridad y la salud en el trabajo”; VIII. “La formación como antídoto frente a la ineptitud sobrevenida”. De este modo, la Parte II, se inicia con una exposición magnífica del reconocido *iustlaboralista* José Luis Monereo Pérez acerca de la configuración jurídica de los derechos de los trabajadores maduros y su protección, dejando entrever un modelo, desarrollado en los capítulos posteriores, donde por un lado se quiere el envejecimiento activo, pero por otro, se vulneran los derechos fundamentales en materia de tiempo de trabajo o salud, e incluso se facilita la expulsión de los trabajadores de edad avanzada del mercado laboral, algunas veces incurriendo en discriminación por razón de edad.

-Parte III. “Políticas de empleo para los trabajadores de edad avanzada”, estructurada en tres capítulos: I. “Las políticas activas de empleo para las personas de edad madura en la

industria 4.0”; II. “El mercado laboral y los trabajadores maduros. Análisis de su inserción laboral en España”; III. “Trabajadores de edad avanzada o trabajadores maduros en la política de empleo”. Es aquí donde se recogen las críticas a la falta de una política de empleo activa diferenciada para los trabajadores maduros, y especialmente, en materia de formación profesional para reducir la brecha digital y evitar su obsolescencia.

-Parte IV. “Protección social y envejecimiento activo”, dividida en cinco capítulos: I. “Trabajadores maduros y pensionistas productivos. El envejecimiento activo laboral”; II. “La pensión de viudedad y el envejecimiento activo. Su compatibilidad con las rentas del trabajo”; III. “Incapacidad permanente y trabajadores de edad avanzada”; IV. “La protección por desempleo de los trabajadores de edad avanzada”; V. “El sistema de jubilaciones en Italia y la última inversión de tendencia: la pensión anticipada a través de la Quota 100”. Resulta interesante, destacar la aportación del profesor y experto en materia de Seguridad Social, Juan Antonio Maldonado Molina (Co-Director de la obra), al exponer con claridad las luces y sombras de las diferentes y enmarañadas formas de jubilación (parcial, flexible, activa, entre otras), principal medida para fomentar el envejecimiento activo.

En definitiva, nos encontramos ante una magnífica obra que aborda perfectamente la problemática del envejecimiento poblacional y su compatibilidad con el trabajo, cuestión de enorme trascendencia económica, política, social, e incluso cultural. Además, la interrelación de numerosos expertos y su enfoque integrado de diferentes ramas del saber, hace que cualquier interesado en la materia obtenga un conocimiento amplio y completo. También se promueve un juicio crítico, así como se transmite una inquietud por la necesidad de cambios legales y sociales. De este modo, la obra *“Envejecimiento activo y vida laboral”* no defraudará, sin lugar a duda, pues aportará una visión más acertada sobre el nuevo panorama, el cual es ya una realidad que afecta a la sociedad en su conjunto.